EN ATENCIÓN A QUE LA NORMA DEMANDADA QUE REGULABA EL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN LA DIAN FUE DEROGADA, LA CORTE SE INHIBIÓ DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO

IV. EXPEDIENTE D-12223 - SENTENCIA C-591/19 (diciembre 5)
M.P. Alberto Rojas Ríos

1. Norma acusada

LEY 1819 DE 2016
(diciembre 29)

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 332. ENCARGO Y NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1739 de 2014, los empleos pertenecientes al sistema específico de carrera en vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos en forma transitoria mediante la figura del encargo o del nombramiento en provisionalidad.*

El nombramiento en provisionalidad procederá, ante la inexistencia de empleados de carrera a ser encargados. La inexistencia de personal a encargar se produce por cualquiera de los siguientes eventos.

1. No cumplimiento de requisitos para el desempeño de los empleos a proveer.

2. Por haber renunciado o no aceptado un encargo en el último año.

3. El estar desempeñando un empleo en calidad de encargo.

4. Habiéndose ofertado internamente los empleos a proveer, los empleados con derechos de carrera, en el plazo concedido, no manifiestan interés en ser encargados.

2. Decisión

Declararse **INHIBIDA** de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del aparte del artículo 332 de la Ley 1819 de 2016, en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Síntesis de la providencia

Se demanda el artículo 332, numerales 2 y 3 de la Ley 1819 de 2016, por los cargos de violación de los artículos 40.7 y 125 Superiores. Sostiene que el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política garantiza el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos a través de la carrera administrativa, seleccionando a través de concurso, los mejores candidatos para cumplir los fines del Estado y promoviendo, además del ingreso, el ascenso del personal ya escalafonado. En ese sentido, cuestiona que los apartes demandados impidan el ejercicio del encargo administrativo cuando un empleado de carrera no hubiese aceptado otro, dentro del año inmediatamente anterior, o hubiese renunciado al mismo, en tanto se incorporan requisitos injustificados que nada tienen que ver con el mérito y que afectan el contenido del derecho constitucional.

Antes de precisar el problema jurídico a resolver la Sala Plena explicó que el control de constitucionalidad supone un juicio de contraste entre la Carta Política y una norma de inferior jerarquía; de allí que su vigencia sea indispensable para llevar a cabo el referido control. Sobre esto último refirió que para analizar la vigencia de la norma debe entenderse que se concreta la derogatoria expresa, cuando el Legislador, también expresamente, retira la norma del ordenamiento jurídico; es tácita cuando existe un cambio de legislación entre lo regulado en una ley anterior y una nueva, de manera que esta contiene disposiciones incompatibles o que no pueden conciliarse con las de la ley anterior, y en esa medida, se necesita de un ejercicio de interpretación de ambas para establecer cuál rige la materia o si existió una derogatoria total o parcial o subrogación y, por último la derogatoria orgánica, que implica que la nueva ley regula íntegramente la materia que otra normativa regulaba.

La Corte explicó que cuando se presentan estas transformaciones normativas en casos bajo su conocimiento, debe establecer la vigencia de las disposiciones demandadas, lo que le permite fijar su competencia. Explicó que en la Sentencia C-019 de 2015, se indicó que, el análisis para determinar si un enunciado normativo fue derogado o subrogado, inicia con establecer el fenómeno ocurrido, es decir, precisar si se trata de una derogatoria explícita, tácita, orgánica, o subrogación. Si, aun en presencia de alguna de estas situaciones, la norma derogada o subrogada mantiene efectos jurídicos, en ese caso esta Corte es competente para iniciar el juicio de constitucionalidad. En este momento, una de las posibles hipótesis es que el texto demandado haya sido subrogado por una norma de la misma jerarquía que, además, reproduzca su contenido de manera idéntica. En este caso, se debe analizar la eventual aplicación de la integración normativa bajo circunstancias específicas, tal como lo ha explicado la jurisprudencia (Sentencia C-200 de 2019). Ello se produce debido a que la norma continúa produciendo efectos jurídicos, razón por la que es dable aplicar los principios de *pro actione*, la economía procesal y del debido proceso, y, por consiguiente, proferir un fallo de fondo.

A partir de tales consideraciones la Sala Plena verificó que la disposición objeto de análisis, es decir el artículo 332 de la Ley 1816 de 2016 fue derogada expresamente por el artículo 150 del Decreto Ley 1144 de 2019 y, en tales circunstancias la Corte Constitucional carece de competencia para adelantar el respectivo control de la norma, de allí que se inhibió de definir la controversia, dada la falta de vigencia normativa y, con ello la falta de competencia.